

La responsabilidad social compartida frente a la migración en un escenario posconflicto

La responsabilité sociale partagée appliquée à la migration dans un scénario de post-conflit

Freddy Gustavo GALEANO

Doctorando en ciencias políticas, Universidad complutense de Madrid, España
Creador de Plainmigration, Observatorio de investigación para las migraciones procedentes de Latinoamérica, Amsterdam, Holanda
f.galeano@plainmigration.com

Lara MITCHEL

Colaboradora de Plainmigration, Observatorio de investigación para las migraciones procedentes de Latinoamérica, Ginebra, Suiza
michell@plainmigration.com

Les déplacements forcés sont un dénominateur commun en cas de conflits. Dans ce processus qui touche en particulier la communauté de El Salado, en Colombie et qui prétend favoriser l'après conflit, on observe que le tissu social est affecté au niveau de la cohésion de la communauté et du sentiment d'appartenance. Dès lors, la responsabilité sociale partagée et une approche multidimensionnelle de la cohésion de la communauté montreront comment tous les acteurs sociaux de l'État, des entités, des fondations et autres victimes de la société, sont impliqués dans le processus de reconstruction des communautés touchées par le conflit.

Mots-clés : Palabras clave: responsabilité sociale partagée, post-conflit, déplacements, massacre El Salado

En situaciones de conflicto, los desplazamientos forzados son un común denominador. En procesos donde se pretende propiciar un posconflicto, se puede observar que el tejido social se ha afectado en su cohesión como comunidad y en su sentido de pertenencia. Desde la responsabilidad social compartida y el enfoque multidimensional de la cohesión comunitaria, veremos cómo todos los agentes sociales, desde estatales, entidades, fundaciones, víctimas y resto de la sociedad, entran a ser partícipe en procesos de reconstrucción de comunidades afectadas por el conflicto.

Palabras clave: responsabilidad social compartida, posconflicto, desplazados, masacre El Salado

‘La construcción de paz debe iniciarse en pleno conflicto porque evita un deterioro mayor, anticipa los retos futuros, fija una agenda y sienta unas metas; además, la guerra permite mayor creatividad y osadía de los actores, contribuye a la transformación del conflicto, atrae la atención y el apoyo internacional y genera los lazos institucionales y sociales necesarios...’

Mwalimu Julius K. Nyerere (líder africano)

I- Marco socio histórico sobre desplazamiento forzado y conflicto en Colombia: 1920-2015

El conflicto ha producido el desplazamiento forzado de personas en diferentes periodos históricos y afecta a 50 países en los cinco continentes. En América latina, se calcula aproximadamente 3,8 millones de personas desplazadas por conflictos armados internos; la mayoría se da en Colombia con una frecuencia de expulsión, para el 2005, de unas 250.000 personas por año. A su vez, otros países como Guatemala, Perú y México presentan migraciones internas que afectan especialmente a las poblaciones indígenas (Builes et al 2008). Los autores añaden que los principales agentes que causan el desplazamiento en el contexto internacional son los gobiernos nacionales. Esto se da de manera directa o a través de grupos paramilitares o milicias que fuerzan a la población a dejar sus hogares.

En Latinoamérica, para hablar de conflicto, posconflicto y desplazamiento forzado partiremos del surgimiento de grupos guerrilleros que emergieron a inicios del pasado siglo en el continente. Según Chernick (1998), estos grupos fueron influenciados por el pensamiento marxista e intentaron desafiar los gobiernos de turno. El autor añade que las guerrillas en Latino América se desplegaron en montañas, selvas y llanuras escasamente habitadas, lo cual propició su movilidad. Para los grupos insurgentes, la meta principal ha sido la desestabilización de los sectores hegemónicos que se quedan con la mayor parte de las rentas nacionales Chernick (1998). Los grupos insurgentes se formaron en Centro y Sur América en donde su historia político-social ha estado marcada por regímenes dictatoriales, democráticos y, a su vez, por revoluciones, guerras civiles y pacificación.

En Colombia, el conflicto ha sido una constante en su historia socio-política. Builes et al (2008) indican que los procesos de violencia y desplazamiento se han expresado de manera particular en cada uno de los momentos históricos del país. A mediados del siglo XX, se presentó la confrontación partidista entre liberales y conservadores. En 1948, en medio de esta confrontación fue asesinado el político liberal Jorge Eliécer Gaitán lo cual desató el alzamiento popular llamado el *bogotazo* que se extendió a todo el país. Otro momento histórico conocido como *la violencia* tuvo lugar desde 1946 hasta 1958 y fue una guerra civil no declarada. Como resultado de *la violencia*, se produjo gran expansión de los latifundios, beneficiando a los grandes terratenientes, corporaciones ganaderas y agroindustriales Boot(1974). Florez (2000) indica que el país se transformó socio-demográficamente, pasando del predominio rural a un país predominantemente urbano, principalmente por el desplazamiento forzado de aproximadamente 2 millones de personas. Entre 1958 y 1974, como parte de la negociación política del conflicto interno, se vivió el periodo conocido como el *Frente Nacional*, resultado del acuerdo pactado entre las clases dirigentes de ambos partidos políticos, para alternarse en el poder.

Uno de los desplazamientos forzados en Colombia tuvo inicio en 1985 con la agudización del conflicto interno, o sea la disputa entre los actores armados, mediante el control, especialmente, de las zonas rurales (Flores, 2000). En relación a este proceso de desplazamiento forzado, en esta década aparece en la escena colombiana, el fenómeno del

narcotráfico¹, que hará más complejo el escenario de la violencia política del país. Este fenómeno, con el tiempo, se fue infiltrando en las diferentes esferas sociales y políticas, distorsionando el funcionamiento socio-económico del país y constituyéndose en factor de violencia debido a que parte de esos dineros financiaron la capacidad bélica de los grupos en confrontación, agravando la degradación del conflicto armado interno (Franco, 1999).

Zuluaga (2004) analizó el surgimiento de las guerrillas en Colombia y enumeró dos grupos: las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), actor contra-estatal que nació como resistencia del movimiento campesino contra la violencia del gobierno en 1964, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que se originó dentro de un grupo de estudiantes, dirigentes sindicales y profesionales quienes deciden crear una organización político-militar, inspirada en la ideología marxista y cristiana, para construir el socialismo². Un tercer movimiento fue el 19 de Abril (M-19) que surgió asociado a la ANAPO³, que logró un proceso de paz en 1990 y se destacó como un movimiento revolucionario, pionero en hacer política en las ciudades, formando la Alianza Democrática M-19, movimiento político que, al desmovilizarse como guerrillero, fue exterminado por parte de la derecha colombiana a mediados de los 90 (Narváez, 2012).

Durante estos años, casi paralelamente con el fenómeno del narcotráfico, surgen las fuerzas paramilitares, como otro actor armado del conflicto colombiano. Estos grupos fueron conformados y financiados por particulares (latifundistas, narcotraficantes y ganaderos) para contrarrestar la extorsión y los secuestros de la guerrilla y proteger sus patrimonios. Se ha considerado también al paramilitarismo como un componente de la política contrainsurgente del Estado, que realiza actividades anti-guerrilleras, con el apoyo directo o velado de las Fuerzas Armadas. Correa y Rueda (2000) indica que, en ocasiones, los grupos paramilitares actúan en territorios donde el Estado no ha hecho presencia.

Este fenómeno ha tenido un crecimiento importante en lo militar y político, agudizando más la degradación del conflicto armado y convirtiéndose en los mayores causantes de los desplazamientos forzados, mediante las masacres y las amenazas de muerte a poblaciones rurales. En cuanto al papel del Estado como actor del conflicto, Correa y Rueda (2000) apunta que éste, desde un principio, ha tenido la estrategia de evasión de sus responsabilidades estatales para erigirse como una víctima más de la violencia. Además, la sofisticación del modelo de represión y control que pasa de la tortura a la desaparición forzosa, del asesinato selectivo al desplazamiento forzado a través de las diversas formas de para-estado y de guerra integral, son la clara expresión de la participación por inercia del Estado en la violencia y el desplazamiento en Colombia.

El conflicto en Colombia señala un mapa en el que las zonas en donde más se expulsan colombianos de manera violenta, son aquellas en las que se ubican megaproyectos y en donde el territorio es rico en recursos minerales y energéticos (Bello, 2004). Este autor agrega que, desde el surgimiento de los grupos paramilitares hacia finales de los ochenta, la lucha contra la guerrilla por dominio del territorio ha sido objeto de confrontaciones armadas y, dramáticamente, de acciones atroces contra la población civil, señalada como simpatizante, colaboradora o 'guerrilleros vestidos de civil'. En este sentido, se afirma que los territorios son despoblados y repoblados al antojo de los actores armados.

¹ El problema "narco", según Franco (1999), comprende la producción, tráfico y consumo de narcóticos.

² Estos dos grupos son todavía activos.

³ Alianza Nacional Popular en <http://cultural.uis.edu.co/files/ANAPO%20LIBRO.pdf>

Sobre el posconflicto en Colombia, Camacho et al (2002) enumeran una serie de campos en lo que el gobierno y organismos internacionales han intentado apoyar este proceso:

Apoyo a recuperación posconflicto:

- Atención humanitaria a víctimas del conflicto
- Retorno y apoyo de poblaciones desplazadas
- Desmovilización/reintegración de excombatientes
- Desminado
- Reconstrucción de infraestructura

Temas económicos:

- Restauración de capacidad de manejo económico
- Generación de recursos para el post-conflicto
- Narcotráfico
- Papel del sector privado

Temas políticos y de administración del Estado:

- Adecuación y fortalecimiento de instituciones estatales
- Ordenamiento territorial
- Instituciones políticas para compartir el poder

Temas judiciales:

- Restauración o consolidación del Estado de derecho
- Justicia transicional
- Comisiones de la verdad

Temas sociales:

- Procesos sociales de perdón y reconciliación
- Grupos sociales vulnerables
- Fomento al resurgimiento y consolidación de la sociedad civil

Temas militares:

- Estrategia de seguridad para el posconflicto
- Organización de las Fuerzas Armadas y de la Policía
- Gasto militar y post-conflicto

Temas internacionales:

- Recursos para apoyar la construcción de paz y el post-conflicto
- Facilitación, mediación y verificación
- Derecho Internacional Humanitario

II- La Responsabilidad social compartida frente a la migración en un escenario posconflicto

La Responsabilidad social compartida es el enfoque empleado para mostrar los beneficios de aplicar un modelo de conexión social. Apoyándonos en el proceso de Cohesión Comunitaria nos permitirá establecer los conductores y circunstancias que intervienen entre los sujetos y sus estructuras dentro de los procesos posconflicto, en especial. Nos enfocaremos en las personas que sufrieron desplazamientos a raíz del conflicto y que deben ser tenidas en cuenta para la reconstrucción del tejido social⁴ de la comunidad.

Se consideró pertinente, primero, definir los conceptos que nos sirven de fundamento para acercarnos al tema que nos atañe. Concretamente, se trabajará sobre el enfoque de cohesión comunitaria y el de responsabilidad social compartida. Una vez definidos los conceptos, se intentará encontrar una sinergia entre la utilidad que puede representar la aplicación de estos enfoques en un posible escenario posconflicto en Colombia.

Para entrar al tema de Cohesión comunitaria, nos remitiremos a la definición integral creada por Cohesión Comunitaria e Innovación Social (CCIS) en 2010. Esta definición es ‘el resultado de un proceso por el cual las sociedades construyen oportunidades, relaciones, identidades, incentivos y lazos para que las personas alcancen su máximo potencial’⁵. El grupo de trabajo de la CCIS halló esta definición por medio de un estudio comparado entre metodologías de cohesión social que involucraban diferentes organizaciones: la Unión Europea, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

La CCIS indica que existen beneficios sociales asociados a la cohesión comunitaria ya que se enfocan en establecer un equilibrio social. Por lo tanto, a mayor cohesión comunitaria aumenta la satisfacción con la vida, la confianza, solidaridad y empatía, la participación ciudadana y las acciones voluntarias, el número de personas que obtienen un empleo satisfactorio, el desempeño educativo, la inversión. También se multiplica el valor de los bienes en zonas residenciales y comerciales. A mayor cohesión comunitaria disminuye el crimen total y el violento, el robo a casa-habitación y de vehículos, la deserción escolar, el riesgo de enfermedades mentales, la tasa de suicidios y enfermedades asociadas al estrés y la depresión, la desigualdad de oportunidades (CCIS, 2010).

La CCIS (2010) señala que la Cohesión comunitaria comprende un sistema multidimensional en donde se comprometen todos los agentes de la estructura social. Las dimensiones abarcan lo público y lo privado: entidades del estado y sociedad civil. Comprenden la igualdad de oportunidades, el reconocimiento, valoración y celebración de la diversidad, la detección-gestión y solución de conflictos, divisiones y tensiones, las relaciones positivas entre personas, grupos, comunidades y localidades. Además se tienen en cuenta los derechos y valores democráticos internalizados, la interacción y confianza, solidaridad y empatía, las relaciones positivas entre personas, grupos, comunidades y localidades, la identidad, sentido de pertenencia y una noción de futuro compartido así como la organización, empoderamiento y participación.

Todas estas dimensiones son fundamentales para que se gestione un restablecimiento del tejido social. No obstante, para el caso de estudio que será expuesto acá, solo haremos hincapié en las dos últimas: la identidad, sentido de pertenencia y una noción de futuro compartido y la organización, empoderamiento y participación. Eso se debe a que afectan de

⁴ La definición del tejido social se refiere a la generación y afianzamiento de los lazos que unen los diferentes intereses individuales y les dan un sentido colectivo (Granados y Escobar, 2003).

⁵ <http://www.cohesioncomunitaria.org/?p=435>

un modo más directo a las personas que migraron por el conflicto, así que, de alguna manera, en la estructura social se puede trabajar para crear un escenario que facilite un retorno donde se pueda garantizar la reincorporación como sujetos activos de la comunidad. Al hablar de identidad, sentido de pertenencia y noción de futuro compartido, nos remitimos al concepto de Grimberg y Grimberg sobre identidad, que dice que:

la identidad expresa la relación de un individuo y su grupo como sentimiento. Y se construye a partir de procesos entre tres conexiones: el vínculo de integración temporal, el vínculo de integración espacial, y el vínculo de integración Grupal (1993, p. 26)

El sentido de pertenencia y la noción de futuro compartido están incluidos dentro de las conexiones de los tres vínculos. Asimismo, dentro de la dimensión de identidad, tenemos en cuenta que el hecho de forzar a una persona o a un grupo a migrar puede afectar la identidad del individuo y de su comunidad. Al respecto citamos de nuevo a Grimberg y Grimberg que argumentan que “el verse forzado a migrar desencadena angustias en relación con su identidad y la vivencia de vacío ante sus roles conocidos” (1993:150). Además el desplazamiento forzado genera una amenaza a una desintegración del tejido social; es decir que rompe de manera abrupta los vínculos espacial, temporal y grupal. Eso conlleva a trastornos psíquicos como la ansiedad, paranoia, la culpa y las ansiedades depresivas entre otras patologías que afectan la salud mental de las víctimas y victimarios (Grimberg y Grimberg, 1993: 139).

La dimensión de identidad, sentido de pertenencia y noción de futuro compartido es central para nuestro estudio. Es un elemento que también concierne a los migrantes que han dejado su espacio de origen. Establece el vínculo necesario para que no se dé pie al rechazo hacia *el otro*⁶ por parte de la población que permaneció en el territorio en donde se presentó el conflicto. Permitirá a la vez que se dé cabida a la *re-integración* a esta población migrante a la dimensión de organización, empoderamiento y participación colectiva.

Con la dimensión de organización, empoderamiento y participación se pretende identificar a los actores sociales que intervienen en el proceso de reconstrucción del tejido social en el posconflicto. Para complementar esta idea, definimos el empoderamiento y su relación con participación y organización. Montero (2003) prescinde del neologismo *empowerment*, para referirse a su significado con el término "fortalecimiento", de la lengua castellana - de uso anterior a la aparición del concepto *empowerment* donde existe una correspondencia clara entre ambos términos. Lo define como:

El proceso mediante el cual los miembros de una comunidad (individuos interesados y grupos organizados) se organizan desarrollando conjuntamente capacidades y recursos para controlar su situación de vida, actuando –participando- de manera comprometida, consciente y crítica, para lograr la transformación de su entorno, según sus necesidades y aspiraciones, transformándose al mismo tiempo a sí mismos (Montero, 2003: p. 72).

Se eligieron estas dimensiones al considerar que, en ellas, radica una profunda motivación por sobrepasar a las circunstancias y recuperar su comunidad. Hay sentimientos compartidos, arraigados, muy particulares, como es el mismo sufrimiento del conflicto como factor

⁶ Kulka (1999:196) argumenta que la imagen del otro depende, en algunas culturas, de la separación étnica, cultural y religiosa. Se basa en una colección de puntos de vista, conceptos y posiciones que se transmiten, se reciben y se internalizan.

identitario y la migración forzada que representa un cambio profundo que pone en riesgo la identidad por las pérdidas que representa el rompimiento forzado de los vínculos temporal, especial y grupal.

A pesar de haber sido creado para el caso particular de México, este modelo de Cohesión Comunitaria es aplicable al caso colombiano por sus similitudes en cuanto a la realidad social y conflictos sociales que adolecen ambas sociedades: conflictos armados y guerras contra el narcotráfico, circunstancias que generan desplazamientos involuntarios⁷ de comunidades y que, además de transformar los proyectos de vida de los miembros de la comunidad, afecta de manera grave a los planes estructurales de desarrollo, local y zonal.

Para el concepto de Responsabilidad Social Compartida nos remitiremos a la definición de su autora Iris Marion Young, quien desarrolla el concepto de Modelo de Conexión Social donde se entiende que:

Tanto los individuos como los organismos que contribuyen con sus actos a procesos que ocasionen injusticias sociales comparten la responsabilidad por esas injusticias que se puedan presentar dentro de una comunidad o estructura social. Así en esencia la responsabilidad es compartida y solo se puede cumplir mediante la acción colectiva (Young, 2011:108).

Este enfoque es central para nuestro análisis. Lo encontramos pertinente para que el proceso de Cohesión Comunitaria y reconstrucción del tejido social se pueda desarrollar de la mejor manera posible, al erigirse como el *leitmotiv* o la filosofía de compromiso mutuo, necesario para que se logre la cohesión comunitaria. Además, ambos enfoques parten de premisas compatibles y sustentables, como es la participación de toda la comunidad en el proceso de reconstrucción, incluyendo la que, por razones del mismo conflicto, pasó a ser comunidad desplazada. Son proactivas para que, en un posible escenario posconflicto en Colombia, se maneje la problemática de la migración forzada de manera incluyente. Además estos flujos migratorios o desplazamientos se generan por las mismas circunstancias del conflicto armado.

Para llevar estos conceptos de la teoría al terreno pragmático es necesario comprender que, para lograr una cohesión comunitaria en un escenario posconflicto, es fundamental tomar elementos de la responsabilidad social compartida. En efecto, nos brindan un modelo de conexión social, una manera de afrontar escenarios en donde se requieren cambios sociales que implican la participación responsable, comunitaria, de cada uno de los sectores de la sociedad, incluyendo por supuesto a las instituciones del Estado, dejando así de lado el modelo de obligación que se centra en argumentos de culpa y no involucra tanto a las decisiones personales de individuos y a las fallas en los organismos o instituciones. Además, solo buscaría la identificación de culpables con el objeto de sancionar (Young, 2008: 110).

Al no incluir a las instituciones del Estado, dejaría de ser responsabilidad social compartida. Los modelos de obligación, en su esencia, se alejan de la responsabilidad que se nutre de una convicción en donde se pretende evitar injusticias sociales a través de una responsabilidad compartida, espontánea. Por el contrario, pretenden una puesta en orden a través de mecanismos de presión, culpa y castigo. Éstos se alimentan con argumentos de culpabilidad que polarizan a quienes intervienen en procesos de injusticias sociales, con

⁷ Las personas desplazadas internamente se definen como personas que como resultado de persecución, conflicto armado o violencia, han sido forzadas a abandonar sus hogares. Dejan su lugar habitual de residencia y permanecen dentro de las fronteras de su propio país (UNHCR/ ACNUR, 1997).

discursos que aún pueden desgastar más la credibilidad del Estado y, por ende, no dejan ver el camino a las soluciones integrales y responsables.

Con el Modelo de conexión social, se entiende que toda iniciativa tiene que darse por el simple hecho de los beneficios y propósitos que genera el reconstruir el tejido social para que el posconflicto sea sostenible. Establecer que la responsabilidad social tiene que ser compartida entre todos los agentes sociales que han intervenido en el desarrollo del conflicto y el posconflicto, desde el mismo Estado, hasta las víctimas y victimarios.

Como expuesto anteriormente, ambas teorías o enfoques (cohesión comunitaria y responsabilidad social compartida) tienden a promulgar un equilibrio social, en función de evitar, solucionar y reparar actos de una injusticia social, temas centrales en un posible escenario de posconflicto. Ahora bien, es necesario tomar los elementos que intervienen en ambos enfoques para llevarlos al plano del posconflicto e intentar visionar un escenario deseable. De la responsabilidad social compartida tomaremos en esencia el vincular el grado de responsabilidad con el rol de cada agente social, pero de manera especial entender que tenemos que mirar tanto las decisiones personales de cada individuo que compone la sociedad como las fallas estructurales que se producen en los entes estatales y privados.

En el posconflicto se requiere de una cohesión comunitaria que envuelva las dimensiones, ya mencionadas, que vamos a analizar. Asimismo necesita que se desarrolle una sinergia de manera segura a partir de mecanismos que faciliten entender y procesar las circunstancias propias del conflicto - donde prevalecen los intereses que polarizan a la población. La prioridad se centra en valorar el rol de los agentes sociales, entre ellos los movimientos sociales; las Organizaciones No Gubernamentales, tal como se ha experimentado⁸, ayudan a garantizar la reconstrucción del tejido social y a incluir a la población desplazada migrante.

Para conseguir que se logre la cohesión comunitaria en una dinámica de responsabilidad social compartida de la que nos habla Young, la autora nos invita a identificar los agentes sociales de acuerdo a un parámetro de su rol social, o sea: *actores sociales con poder, privilegio, interés y capacidad colectiva* (Young, p 18). Luego de haberlos identificado podremos ubicarlos en las dimensiones de la cohesión comunitaria y, así, establecer la conexión social para entender si se logra la participación plena de la estructura social representada, tanto en las instituciones gubernamentales como privadas y en el resto de la comunidad (desplazados incluso) en el posconflicto.

Los *Agentes de poder* contienen las entidades e instituciones gubernamentales nacionales y locales. También están los representantes de los grupos armados. Los *Agentes con privilegio* son los agentes que representan la institucionalidad local, como por ejemplo las entidades de gobierno locales. Además estarían los representantes del mismo gobierno central colombiano. Los *Agentes de interés* que por su misma naturaleza confluyen todos los agentes anteriormente citados, la población civil y los observadores internacionales; aquí, entran a formar parte los migrantes al ser prioritaria su voz. No obstante, aún son confusos los mecanismos para su participación, de ahí que sea fundamental que se reconozca su status

⁸ Un ejemplo de esto se puede observar en una investigación etnográfica y de intervención social realizada en el municipio de Soacha, Colombia, al que, desde 1998, han llegado personas desplazadas por la violencia. En este estudio se observó que, a través de una perspectiva interdisciplinaria, en la cual intervienen ONGs proactivamente, se puede contribuir a la reconstrucción del tejido social en una comunidad de migrantes desplazados por la violencia (Picón et al. 2006).

de víctimas⁹. Por último, encontramos a los *Agentes con capacidad colectiva*, donde entran a apoyar los líderes comunales, las ONG's, los medios de comunicación, quienes con el apoyo de nuevas tecnologías en comunicación con más alcance para llegar a la población (redes sociales virtuales, blogs, los portales estatales, etc.) ocupan un lugar remarcable ya que facilitan que los planes de mantener informada a las personas emigradas, interesadas en participar de esa "nueva comunidad", sean conocidos casi de manera instantánea y a bajo costo y sin depender del correo tradicional que podría tardar meses o nunca llegar. Por supuesto, a nivel macro los representantes del Estado serían facilitadores para que aquellos agentes, con capacidad colectiva, cumplan su rol informativo.

A. Estableciendo conexiones entre la Cohesión comunitaria y la Responsabilidad social compartida

De acuerdo con los trabajos desarrollados por la CCIS en México se ha podido demostrar que la aplicación del enfoque de la cohesión comunitaria ayuda a que se den las condiciones sociales aptas para ambientes más seguros y menos violentos. Aumenta los niveles de confianza para desarrollar proyectos entre la comunidad; además aporta un elemento central en ambientes posconflictos en el fortalecimiento de prácticas que promueven los derechos humanos, dado que se generan canales de comunicación y de convivencia entre individuos de diferentes sectores de la sociedad.

Pero no basta ese vínculo. Es allí donde la responsabilidad social compartida entra a ser soporte de la Cohesión Comunitaria. Ella persuade a todos los agentes de la estructura social que participan en un ambiente de concientización y sensibilización, en que cada actor social tiene un rol por desempeñar en que lo que haga o deje hacer depende de que los vínculos entre las dimensiones comunitarias se den de manera proactiva a la formación de "esa nueva comunidad". Así, por ejemplo para lograr fomentar la cooperación entre autoridades y ciudadanos, que se establezcan espacios de participación, los agentes sociales tienen que ser conscientes que su rol se acompaña de una serie de responsabilidades sociales para que se creen vínculos y espacios para la colaboración.

B. La cohesión comunitaria y la responsabilidad social compartida en un escenario posconflicto: el caso de la reconstrucción de El Salado

El caso de estudio para nuestro análisis es la reconstrucción de El Salado, después de la masacre del 2000. El Salado es un corregimiento del municipio de El Carmen de Bolívar, dentro de los Montes de María. Según el *Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación* (CNRR, 2009) sólo en la región de los Montes de María se materializó un ciclón de violencia en 42 masacres, que dejaron 354 víctimas fatales. La concentración temporal y territorial de masacres que se registró en esta zona era percibida como una marcha triunfal paramilitar, que hizo pensar, en aquel momento, en una repartición del país entre un norte contrainsurgente y un sur guerrillero. La masacre de El Salado ilustra de forma contundente una estrategia paramilitar sustentada en el uso y propagación del terror como instrumento de control sobre el territorio y la población - estrategia que empieza hacia comienzos de la década de los noventa, en masacres. Tal expansión y cotidianización de las masacres se haría, luego, más explicable a la luz de las complicidades de sectores sociales e institucionales, cuyos entrelazamientos quedaron exhibidos en el proceso de la denominada parapolítica (CNRR, 2009:9).

⁹ Un ejemplo de esto es el caso de la Ley de víctimas y restitución de tierras 1448 de 2011, en Colombia <http://www.unidadvictimas.gov.co/normatividad/LEY+DE+VICTIMAS.pdf>

La región de Montes de María constituyó uno de los grandes enclaves de las movilizaciones campesinas de los años setenta. Sus impactos y dinámicas sociales y políticas entraron rápidamente en los cálculos estratégicos de organizaciones guerrilleras como el *Ejército Popular de Liberación*, el *Partido Revolucionario de los Trabajadores* y finalmente las *Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia* (Farc). La guerrilla intenta cooptar a la población de la región supliendo los vacíos institucionales. Sin embargo, a la larga, no fue capaz de actuar ni como protectora ni como proveedora de servicios a las comunidades. A su vez, a través de la estigmatización total de la población, los paramilitares diluyeron las fronteras entre guerrilla y población en El Salado (CNRR, 2009).

Tres años antes de la masacre, en 1997, se registró en El Salado una masacre también perpetrada por paramilitares, provocando que las compañías tabacaleras - que eran la principal fuente económica para la región- se fueran de El Salado. Pero, el cultivo de tabaco no terminó ; sus habitantes continuaron la producción y optaron por su comercialización en El Carmen de Bolívar a través de intermediarios, lo cual deterioró los ingresos económicos de la región, pero no alteró la calidad de vida antes de la masacre de 2000. Por entonces, la población se acercaba a los 7.000 habitantes (CNRR, 2009).

Según declaraciones de los victimarios a la fiscalía, la masacre del 2000 fue planeada por los jefes paramilitares del Bloque Norte Salvatore Mancuso y Rodrigo Tovar Pupo, alias “Jorge 40”, así como por John Henao, alias “H2”, delegado de Carlos Castaño. El hecho tuvo lugar entre el 16 y el 21 de febrero del 2000, por 450 paramilitares que, apoyados por helicópteros, dieron muerte a 60 personas en estado de total indefensión. Según el informe del grupo de Memoria Histórica, la masacre no sólo arrebató la vida a las 60 personas, sino que montaron un escenario público de terror en donde cualquier habitante del poblado era víctima potencial. Las víctimas fueron 52 hombres y 8 mujeres, entre los cuales había tres menores de 18 años, 12 jóvenes entre los 18 y los 25 años, 10 adultos jóvenes entre 26 y 35 años, 23 adultos de 36 a 55 años, y 10 adultos mayores. La intervención de la fuerza pública se hizo solo hasta el 18 de febrero cuando el Comando de la Primera Brigada de Marina ordenó el despliegue de acciones para operar en el territorio de la masacre. La Infantería de Marina llegó al territorio de la masacre, tres días después de que ésta había comenzado, y lo hizo sólo por tierra, sin que hubiera apoyo aéreo (CNRR, 2009).

Tras la masacre, se produjo el éxodo de toda la población, convirtiendo a El Salado en un pueblo fantasma ya que el hecho llevó a más de 4000 campesinos a desplazarse de la zona. Hacia el 2011 solo habían retornado 730 de las 7,000 personas que lo habitaban (CNRR, 2009). El hecho fue muy importante porque toda la construcción discursiva que hicieron los paramilitares, en este periodo en especial, tuvo una gran exposición mediática, como el reporte del CNRR lo indica. Para la época, los medios difundieron las versiones dadas por los paramilitares y la Fuerza Pública que informaban sobre un combate con la guerrilla. Una entrevista a Carlos Castaño¹⁰, terminó por imponer su versión e invisibilizar ante la opinión pública la masacre.

¹⁰ <https://www.youtube.com/watch?v=pRytlGifUNAc.com/watch?>. Ver 4:44 -5:59

III- Análisis

Con datos suministrados por la Fundación Semana (FS)¹¹, una entrevista con el embajador de Colombia en Holanda¹² y documentales de la masacre, en nuestro análisis identificaremos a los agentes que participan de la estructura social. De acuerdo con su rol, identificamos su aporte teniendo en cuenta la responsabilidad social compartida para fortalecer la cohesión comunitaria del corregimiento de El Salado. Se intentará encontrar una relación entre la utilidad que puede representar la aplicación de la cohesión comunitaria dentro de la dinámica de la responsabilidad social compartida, de todos los agentes sociales que intervienen en el escenario posconflicto de El Salado. El grado de la cohesión comunitaria nos ayudará a ver cómo los habitantes de El Salado reconstruyen, afianzan identidades, relaciones, lazos y cómo se hacen partícipes de la sociedad. La Responsabilidad social compartida nos ayudará a saber el grado de compromiso con la comunidad.

A. Preguntas y Análisis

Teniendo en cuenta la cohesión comunitaria, al considerar la dimensión de la identidad, sentido de pertenencia y noción de futuro compartido, exploraremos los vínculos de integración espacial, grupal y temporal.

Preguntas y respuestas:

1. Para evaluar el *vínculo de integración espacial* de los habitantes de El Salado se hicieron las siguientes preguntas.

Las personas que han retornado y/o se quedaron después de la masacre:

- ¿Tienen sentido de pertenencia por su espacio territorial? ¿Se identifican con sus condiciones climáticas?
 - Según la Fundación Semana (FS) se genera una nueva relación de pertenencia de las personas con el territorio. Por ejemplo, en el caso de la relación de los habitantes del salado con el campo, se genera una movilidad social importante ya que los jóvenes y adultos tienen la oportunidad de dejar de ser jornaleros para pasar a ser técnicos agropecuarios. También se crean proyectos de apicultura y la recuperación de las tabacaleras.
- ¿Creen que pueden vivir de manera digna de los recursos naturales que les provee el campo en esta región o zona?
 - Desde el enfoque de la responsabilidad compartida, vemos que este tipo de proyectos representará en el futuro un desarrollo sostenible que utilice los recursos de la tierra. Con aportes de las empresas privadas y del Estado se mejorará la infraestructura para la producción.
 - ¿En el futuro cómo se perciben? ¿Como habitantes ‘ciudadanos’ de un corregimiento o como desplazados sin hogar?

¹¹ *Publicaciones Semana de Colombia* creó la Fundación Semana, para trabajar en uno de los temas más importantes para Colombia en las próximas décadas: el posconflicto y la reconciliación. Buscando diseñar modelos replicables de reconstrucción de un país devastado por la guerra:
<http://www.fundacionsemana.com/home>

¹² El embajador de Colombia en Holanda Eduardo Pizarro Leongómez, quien se desempeñó como presidente de la CNRR, para el caso del Salado.

- De acuerdo con las entrevistas de la FS¹³, El Salado es un proyecto sostenible que compromete a toda la comunidad. Por lo tanto, los habitantes se sienten dueños de su tierra y de lo que producen creando así un sentido de pertenencia y confianza.

2. Para evaluar el *vínculo de integración grupal*, intentamos saber:

- ¿Se sienten parte de la comunidad saladeña?
 - En entrevistas con habitantes¹⁴, se percibe que, a pesar de haber sido desplazados y que hayan regresado, siguen percibiéndose como saladeños, pues han nacido y crecido allí.
- El sufrimiento (carga psicológica: ya sea por pérdidas humanas o traumas) que produjo la masacre a las víctimas, ¿es un factor que identifica y une a la comunidad?
 - En cuanto a la salud mental de las víctimas se analizó un reporte de la revista *Semana* en el que se hace referencia a un estudio hecho por Jiovani Arias sobre la salud mental de 208 víctimas de los Montes de María (entre ellos, los Saladeños) en el cual se encontró que:
 - 81 % de la muestra tiene síntomas de ansiedad,
 - 90 % tiene síntomas de depresión,
 - 90 % tiene una combinación de ambas.
 - El reporte indica también que, si bien la masacre de El Salado fue el evento primario que convirtió a los habitantes en víctimas, la falta de atención temprana y oportuna, el desconocimiento de la historia de violencia, los malos diagnósticos y el maltrato de las entidades de salud, agudizaron sus síntomas.¹⁵

Lo que se interpreta como estas cargas psicológicas hace parte de la identidad de la mayoría de pobladores que, en suma, son todas víctimas, dado que el pueblo quedó desolado después de las masacres.

- ¿Creen que pueden ayudar o contar con sus vecinos para resolver problemas comunitarios?
 - En el análisis de los datos suministrados por la FS, observamos que la reconstrucción y la resolución de los problemas ha sido un proceso grupal ya que los mismos saladeños han contribuido a la reconstrucción de El Salado. Esta intervención se ha dado desde la participación en las decisiones hasta la puesta en marcha de las labores de reconstrucción.

3. Para evaluar el *vínculo de integración temporal* intentamos saber:

- ¿Cómo se perciben ellos? ¿Creen que pueden trabajar por un futuro compartido?
 - En la reconstrucción se presenta la labor, articulada en un esquema de alianza que incluye sectores público, privado, las entidades internacionales,

¹³ <http://www.revistacredencial.com/credencial/content/el-poder-de-transformaci-n-de-la-responsabilidad-social-s-se-puede>

¹⁴ En <https://www.youtube.com/watch?v=SGlnGooVibw&feature=youtu.be>

¹⁵ En <http://www.semana.com/especiales/conflicto-salud-mental/index.html>

las fundaciones empresariales y los mismos saladeños, para construir un futuro compartido.

- Se puede mencionar la campaña creada al inicio del proceso de reconstrucción cuyo slogan: “IMAGINA!”¹⁶ crea un vínculo de integración grupal como temporal, pues establece una visión de grupo en el tiempo y prepara un ambiente para que los desplazados puedan poco a poco regresar¹⁷.

4. Para evaluar el grado de Organización, empoderamiento y participación,¹⁸ intentamos identificar el plan de acción de los diferentes agentes sociales en el proyecto de reconstrucción. En las conclusiones mostraremos brevemente cómo los agentes sociales que intervienen en el posconflicto participan, de acuerdo a su rol, en la estructura social. En la entrevista al embajador de Colombia en Holanda, Eduardo Pizarro Leongómez, las preguntas y respuestas fueron:

- Como presidente de la comisión nacional de reparación y reconciliación ¿cómo se hizo participe el gobierno para garantizar o facilitar la organización, empoderamiento y participación de todos los agentes sociales (público, privado, víctimas victimarios) que intervienen en conflicto y posconflicto de la masacre de El Salado?
 - Min 01:18: ‘...La CNRR se reunió inicialmente con los desplazados quienes vivían en diferentes ciudades de la zona y les propuso una reparación tanto colectiva como individual...’. A través de la CNRR se vincularon el gobierno nacional, departamental y local para colaborar en la reconstrucción.
- ¿Qué resultado tuvieron los programas piloto de reparación que estaba desarrollando la antigua CNRR?
 - Min 01:32: ‘... En el Salado se llevó a cabo el programa Piloto. El resultado fue una construcción de la reparación colectiva dialogada, construida con la comunidad, pero con la participación de expertos porque es muy difícil el retorno de un campesino a una zona de masacre desmontada sin el apoyo técnico y logístico del gobierno ...’
- ¿Se manejaron criterios de responsabilidad social compartida?
 - Min 00:27: ‘...la responsabilidad es de toda la sociedad: el gobierno nacional porque no había protegido a esas comunidades y no les había garantizado su seguridad; la empresa privada porque no había generado desarrollo económico que requería una de las zonas potencialmente ricas del país; las autoridades regionales y departamentales, la policía y el ejército por no protegerlos - al contrario, en muchas ocasiones, agentes del Estado fueron aliados de los grupos paramilitares; la propia comunidad por caer en este fuego perverso, por miedo, por intimidación, por simpatía o ideología. El Salado es un ejemplo de cómo, desde la misma comunidad,

¹⁶ <https://www.youtube.com/watch?v=XsMdYV1IsCY>

¹⁷ Según la FS, en el Salado vivían 7000 habitantes. Después de la masacre quedó desolado. En el 2002 regresaron 76 personas y en el 2009 cuando se inició el proceso de reconstrucción, regresaron 600 personas. Hoy en día viven 2500 personas.

¹⁸ Intentaremos saber cómo los actores sociales intervienen creando canales de participación para la comunidad, facilitando procesos de reconstrucción del tejido. De esta manera, pretendemos identificar cuál es el grado de la Responsabilidad social compartida, en el escenario post conflicto de una comunidad abatida por la violencia.

hasta las estancias del Estado, asumen la responsabilidad por lo que ocurrió...’

B. Análisis del rol de los Agentes sociales

Los *agentes con capacidad colectiva de privilegio y poder* son la Empresa Privada, el Estado y los organismos Internacionales. El plan de reconstrucción liderada por la FS constituyó un plan de desarrollo con 7 áreas de intervención: infraestructura, desarrollo económico, desarrollo comunitario, educación, salud, cultura, deporte y seguridad. Para lograr cubrir todas las áreas se hicieron 2 tipos de alianzas que involucraron un esquema de acompañamiento y un esquema de alianza. El esquema de acompañamiento comprende operadores (sector público y privado) y equipo de campo (agrónomos, trabajadores sociales, ingenieros de sistemas, historiadores y pasantes). El esquema de alianza se apoya en el sector público, sector privado, en las fundaciones empresariales y la cooperación internacional.

Los *Agentes de interés* incluyen a todos los agentes anteriormente citados y a la población civil quienes, en el proceso de reconstrucción, han participado en las mesas temáticas y en los diferentes procesos de las 7 áreas de intervención.

IV- Conclusiones

La reconstrucción de El Salado empezó como un laboratorio público-privado proyectado a 5 años, articulando empresa privada, gobierno, agencias de cooperación internacional y fundaciones empresariales, para lograr proyectos sostenibles que generen empleo y bienestar a poblaciones vulnerables. En el análisis, intentamos saber cuál es el grado de la cohesión comunitaria de los habitantes de El Salado, a partir de un breve escrutinio de las identidades, sentido de pertenencia y una noción de futuro compartido, del grado de organización, empoderamiento y participación de todos los agentes sociales. Además intentamos hacer un reconocimiento del grado de la Responsabilidad social compartida de toda la comunidad que participa en la reconstrucción, en el posconflicto de El Salado.

A partir de nuestro estudio, se puede observar que el grado de la cohesión comunitaria, teniendo en cuenta las dimensiones ya mencionadas, se ha ido consolidando con la reconstrucción del tejido social. Esto, lo observamos al analizar los vínculos de integración espacial, grupal y temporal, por medio de datos recolectados por la FS. Respecto a la dimensión de organización, empoderamiento y participación de todos los agentes sociales que han confluído en este proyecto se puede afirmar que al identificar el rol y el campo de acción de cada agente social se pudo ratificar que la reconstrucción de la comunidad saladeña es el producto del articulado de diferentes sectores: el público, privado, las entidades internacionales, las fundaciones empresariales y los mismos saladeños, para lograr un objetivo común. En este proceso, cada agente social posee o ha sido proveído con las herramientas para fortalecerse y participar como individuo y como colectivo en la reconstrucción de El Salado. El representante del gobierno, en este caso la CNRR, respaldó el proyecto con apoyo técnico y logístico del gobierno para conseguir una reparación, tanto colectiva como individual. La reconstrucción de El Salado representa un ejemplo de Cohesión comunitaria que se hace en sí mismo sostenible pues se crea un compromiso de continuidad por el grado de responsabilidad de cada agente social.

Además se pudo observar que, desde el tejido social, más que desde la infraestructura, es donde se generan los cambios sociales. A partir de allí, se logra reconstruir la confianza perdida por la evasión de responsabilidad, en especial por agentes del Estado (local y departamental) quienes tienden a quedarse en un modelo de obligación y entran en una

dinámica de “tirarse la pelota” o culpar a otros, para negar responsabilidad propia y adjudicarla a otras entidades, incluso a la comunidad, por “dejarse atrapar en este juego perverso”¹⁹ que polariza y estigmatiza a poblaciones como El Salado.

Así, El Salado es una esperanza para muchas otras comunidades del país. Hoy, la gente está reconstruyendo lo que era y lo que quiere ser en el futuro. Todo en el marco de una filosofía de solidaridad, de compromiso por la responsabilidad y por la justicia social, donde no solo son los aparatos del Estado los que tienen la responsabilidad. Se pone de manifiesto una responsabilidad de cada uno de los ciudadanos que actúan de manera cívica y maduran de la responsabilidad personal a la responsabilidad política.

Referencias

Adelman, H. (2001). From refugees to forced migration: The UNHCR and human security. *International Migration Review*, year 35, Núm.1. York, p.7-32.

En:

<http://www.jstor.org/discover/10.2307/2676049?sid=21105025183141&uid=70&uid=3737760&uid=2&uid=4&uid=2129>

Bello, M.N. (2004). El desplazamiento forzado en Colombia: Acumulación de capital y exclusión social. *Revista aportes andinos*, Núm. 7. Quito, p. 8-15

Boot, J.A. (1974). Rural violence in Colombia: 1948-1963. *The Western Political Quarterly*, year 27, Núm. 4. Utah, p.567-679. En:
<http://www.jstor.org/discover/10.2307/447686?sid=21105025183141&uid=4&uid=3737760&uid=2&uid=70&uid=2129>

Builes et al (2008). *Las migraciones forzadas por la violencia: el caso de Colombia*. En *Ciência & Saúde Coletiva*, Año 13, Núm.5. Rio de Janeiro, p.1649-1660.

Camacho et al (2002) *Preparar el Futuro Conflicto y post-conflicto en Colombia*. *Libros de Cambio*. Bogotá: Universidad de los Andes y Fundación Ideas para la Paz y Alfaomega Colombiana S.A.

Chernick M.W. (1998). *Las dimensiones internacionales de los Conflictos internos en américa latina: de la guerra fría (a la paz negociada en Centroamérica) a la guerra antinarcótica*. En *Colombia Internacional*, Núm. 41. Bogotá, p 5-43.

Correa C, y Rueda D. (2000) *La barbarie irracional de la guerra: Efectos psicosociales y culturales del desplazamiento*. Bogotá: Universidad Nacional del Colombia.

Durkheim, É. (1995). *La división del trabajo social*. Madrid: Ediciones Akal.

Flores C.E. (2000). *Las transformaciones sociodemográficas en Colombia, durante el siglo XX*. Bogotá: Banco de la República. Tercer Mundo Editores.

Franco, S. (1999). *El quinto: no matar. Contextos explicativos de la violencia en Colombia*. Bogotá: Tercer Mundo Editores.

Granados, H y Escobar, J (2003). *La Prospectiva como alternativa para la construcción de un tejido social*. Medellín: Esumer.

Grimberg L y Grimberg, R (1993) *Identidad y Cambio*. Barcelona: Paidós.

¹⁹ Según el embajador de Colombia en Holanda Eduardo Pizarro Leongómez.

Kulka, O. (1999). *The critique of Judaism in modern European thought: Genuine factors and demonic perceptions*. In: Wistrich, R. (Eds.) *Demonizing the other: anti-Semitism, racism and xenophobia*. (p. 156-389) Jerusalem: Harwood academis publishers.

Narváez, G (2012). *La guerra revolucionaria del M-19 (1974-1989)*. Tesis de la Universidad Nacional de Colombia. : Bogotá: Magisterio de Historia.

Montero, M. (2003). *Teoría y práctica de la psicología comunitaria*. Buenos Aires:Paidós.

Sánchez et al (2009) *La masacre de El Salado: esa guerra no era nuestra. Grupo de Memoria Histórica Colombia*. Bogotá: Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación.

Picón et al (2006). Desplazamiento y reconstrucción de tejido social en el barrio Altos de la Florida. *Revista Tendencia y Retos*. Núm.11. Bogotá, p.11-23.

Young, I.M. (2011). *Responsabilidad por la justicia*. Madrid: Ediciones Morata.

Zuluaga Nieto, J. (2004). *La guerra interna y el desplazamiento forzado. Desplazamiento forzado. Dinámica de guerra, exclusión y desarraigo*. Bogotá: Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados/Universidad Nacional de Colombia.

Cohesión Comunitaria e Innovación Social y Fundación este país (2010) *Del Tejido Social a la Cohesión Comunitaria Indicadores*. Sept 2010 Revisado el 6 de febrero de 2014en: <http://www.cohesioncomunitaria.org/?p=435>.